

Mayor riqueza, mayor miseria

Varias organizaciones entre ellas la Unión Sindical Obrera y la Corporación Aury Sará Marrugo, convocaron a una audiencia pública para recoger pruebas que puedan servir en una futura demanda contra varias multinacionales en el país, por vulneraciones a los derechos humanos, laborales y ambientales

★ KIKYŌ

Entre el 12 y el 14 de julio se llevó a cabo en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta la preaudiencia del juicio político y ético que se realizará a las multinacionales petroleras en Colombia en el mes de agosto. Al evento asistieron unas 1500 personas, entre comunidades indígenas, campesinas, trabajadores del petróleo.

Asistieron además activistas sindicales canadienses, como Terrylynn Brant, miembro de la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), principal sindicato de empleados públicos y gubernamentales en ese país, Guy Martin, abogado de la Confederación de los Sindicatos Nacionales CSN de Quebec, Constance Vaudrin, Comité para los Derechos Humanos en América Latina, DHAL miembro de APG America Policy Group, Ángela Adams del SCEP, Fort McMurray, Giuliana Fumagalli, representante del Sindicato de Trabajadores Postales STTP y Amir Khadir, diputado en el parlamento de Quebec, del Partido Quebec Solidario.

Hizo las veces de fiscal el abogado Francisco Ramírez, quien contó con un cuerpo colegiado integrado por Manuel Vega investigador e historiador catedrático de la universidad Externado de Colombia, Leila Celis profesora de Sociología de la universidad de Quebec en Montreal y Dave Coles presidente del Sindicato de Energía-Comunicación y Papel de Canadá.

Los temas se centraron en tres ejes fundamentales como el tema indígena, el social-laboral y el medio ambiental, a lo que se le añade la violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales por parte de las transnacionales.

VOZ habló con el presidente de la USO, **Rodolfo Vecino**, quien conoce de cerca la realidad denunciada en esta preaudiencia:



Rodolfo Vecino. Foto Kikyō.

“Ha significado, el lograr traspasar las barreras nacionales hacia lo internacional, muy importante la presencia de organizaciones muy fuertes de Canadá, que vinieron a presenciar de manera directa, lo que está haciendo una transnacional canadiense en nuestro territorio. Eso va a marcar un desarrollo mucho más fuerte de estas audiencias que significan la construcción de un juicio final entre el 16 y el 18 de agosto en la ciudad de Bogotá, donde se estará dando la condena a estas multinacionales, tanto en el sector minero como en el sector petrolero. Queremos un desarrollo minero-energético, a partir de lo que nuestro pueblo quiera de ese desarrollo. No puede ser que nuestra mayor riqueza represente nuestra mayor miseria”.

VOZ también habló con otras voces en la preaudiencia:

Héctor Vaca, Corporación Aury Sará Marrugo.



Héctor Vaca. Foto Kikyō.

Judicializados por exigir derechos

El pasado diez de julio el Movimiento Nacional Carcelario (MNC) informó que los detenidos que participaron en la jornada de protesta en la Tramacúa en Valledupar en abril de 2011, están siendo judicializados.

Hay que recordar que esta protesta terminó abruptamente en junio de 2011 debido a las fuertes golpizas y lanzamiento de gases propinados por el Grupo de Reacción Inmediata. La huelga en esa oportunidad se dio debido a los mismos problemas que siguen denunciándose hasta el día de hoy: derecho al agua potable, atención en salud, buen trato a las visitas, mejora de la alimentación, fuentes de trabajo y estudio, respeto por la dignidad de los reclusos, entre otras peticiones. Los presos tienen el derecho a la protesta consagrado en los artículos 37 y 56 de la Constitución Nacional y en la sentencia T-2008 de la Corte Constitucional. El MNC señaló además que lo decretado como emergencia carcelaria tiene estos efectos pues le da poderes al director del INPEC para vulnerar los derechos de los detenidos.

Comunidad indígena atacada por el Ejército

El pasado miércoles 10 de julio unidades militares de la brigada 27, lanzaron artefactos explosivos hacia la comunidad indígena Nasa, Kwinas Cxham, del corregimiento La Carmelita, municipio de Puerto Asís. Así lo informó la Comisión Intereclesial de Justicia

“Esperamos que sean espacios donde la comunidad, los indígenas, los trabajadores, podamos hacer un juicio ético ya que, las autoridades formales no lo hacen frente a estas empresas. En Colombia lamentablemente vemos como, el gobierno está al servicio de las empresas, las fuerzas armadas están al servicio de las multinacionales y prácticamente pueden hacer y deshacer, con el argumento de que se necesita la inversión extranjera, se llevan nuestros recursos, y nos dejan los problemas”.

Ricardo Apolinar, Corporación Choapo, departamento del Meta.



Ricardo Apolinar. Foto Kikyō

“Pacific Rubiales afecta los derechos humanos básicamente con la política de arras del Estado colombiano, el caso de Puerto Gaitán en concreto, con la presencia paramilitar fuerte de 2006 a 2008, después de que los paramilitares hicieron el trabajo sucio, vino casualmente la inversión extranjera directa y se posicionó allí, y definitivamente viene articulado con la estrategia nacional de meter batallones minero energéticos y eso permite, a la empresa posicionarse

y lograr las grandes utilidades.

Gloria Inés Zambrano, Mesa Hídrica del Pie de Monte Llanero, de Acacias Meta.



Gloria Inés Zambrano. Foto Kikyō.

“Con la llegada de estas empresas petroleras, en mi municipio había 60 mil habitantes y ahora somos 140 mil. Tenemos sobrepoblación, encarecimiento de los arriendos, robos, prostitución. A nosotros nos están explotando hace 20 años. Tenemos tres estaciones: la Estación Acacias, Chichimene y La Esmeralda. Hace 20 años estaban sacando el petróleo de la estación Acacias y Chichimene, ahora se están viendo los impactos en la estación La Esmeralda, ya que están utilizando un sistema muy diferente al anterior. En la vereda La Esmeralda, nos secaron los acuíferos y las aguas subterráneas, quiere decir que contaminaron 59 aljibes, de esa vereda, meten el balde para sacar agua y sale es petróleo, y ahora la petrolera en el tanque les lleva el agua”. ★



y Paz. Según las denuncias, uno de los artefactos detonó a menos de 200 metros de la habitación de uno de los comuneros. Los artefactos explosivos fueron lanzados desde la base militar ubicada en el corregimiento El Porvenir. Por segunda ocasión, unidades del batallón de selva brigada 27, bajo el pretexto de atacar a las FARC, realizan operaciones de manera indiscriminada y sin blanco fijo, poniendo en riesgo la vida e integridad de los comuneros de este territorio.

Fallo ordena no recibir o remitir más internos

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Riohacha abstenerse de remitir o recibir internos de otros centros penitenciarios. El fallo se da luego de que la Defensoría del Pueblo interpusiera una tutela. El ente judicial ordenó la acción hasta tanto no se verifiquen las condiciones mínimas de las que da cuenta el estatuto penitenciario. Además ordenó diseñar un plan de redistribución de la población carcelaria con miras a descongestionar ese establecimiento de reclusión, y conceder el amparo solicitado por la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo en relación con el estado de las instalaciones, los servicios de agua potable y salud y la implementación de programas de estudio y trabajo para los reclusos. ★

S.O.S.